

Señor:

**HONORABLES JUECES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS DE CALI
(REPARTO).
E.S.D**

REF.

PROCESO : ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA

**DEMANDANTES: BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ
GINETH PAOLA RODRIGUEZ PARRA
MARIANA MORENO RODRIGUEZ (menor)
MARIA LILIANA MORENO MARTINEZ**

**DEMANDADOS: LA NACIÓN
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RAMA JUDICIAL – ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**

GABRIEL ALBERTO ARCE SEPULVEDA, mayor de edad, domiciliado y residente en Cali e identificado con la cédula de ciudadanía número 94.538.910 expedida en Cali y portador de la Tarjeta Profesional número 173.906 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ**, mayor de edad, identificado como Cedula de Ciudadanía N° **1.014.187.066 DE CALI**, en calidad de ofendido y perjudicado directo, al igual que **GINETH PAOLA RODRIGUEZ PARRA**, mayor de edad, identificada con Cedula de Ciudadanía N° **C.C 52.810.147 DE SANTAFE DE BOGOTA D.C**, en calidad de cónyuge de **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ**, y como representantes legales de su menor hija **MARIANA MORENO RODRIGUEZ**, del mismo modo **MARIA LILIANA MORENO MARTINEZ**, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía N° **C.C 31.858.173 DE CALI**, en calidad de madre de **BRAYAN STEVEN MORENO**, respectivamente, con profundo respeto me permito manifestarles que presento ante su digno despacho **ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA**, de conformidad con los artículos 90 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA y 86 del C. C. A, en contra de **LA NACIÓN, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** y a la **RAMA JUDICIAL-ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**, con el fin de lograr el pago de la totalidad de los **PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES ACTUALIZADOS**, ocasionados conforme a las siguientes:

DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERA. Declarar que **LA NACIÓN, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** y a la **RAMA JUDICIAL-ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**, son administrativamente responsables de la totalidad de los perjuicios materiales, morales y vida en relación causados a los demandantes, con motivo de privación injusta de la libertad por varios años.

SEGUNDA. Condenar, en consecuencia a **LA NACIÓN, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** y a la **RAMA JUDICIAL-ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**, como reparación del daño ocasionado, a pagar a los actores, o a quien represente

legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material, moral, vida en relación, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma de:

- a. Al señor **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ**, con la suma de **TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$322.755.989.00)**.
- b. A la menor **MARIANA MORENO RODRIGUEZ**, con la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000.00)**.
- c. A la señora **GINETH PAOLA RODRIGUEZ PARRA**, con la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000.00)**.
- d. A la señora **MARIA LILIANA MORENO MARTINEZ**, con la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000.00)**.

O conforme a lo que resulte probado dentro del proceso, o en su defecto, en forma genérica.

TERCERA. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A., aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

CUARTA. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

HECHOS U OMISIONES

PRIMERO: Cabe señalar, que el señor **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ**, en audiencia de Formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, ante juez penal municipal con función de control de garantías ambulante llevada a cabo el día 27 de Abril de 2012, en la ciudad de Buga bajo el radicado 761116000165201100096-00, a petición del delegado de la Fiscalía General de la Nación,- fiscalía sexta seccional de Buga- Valle, le formularon imputación por el presunto delito de homicidio agravado en grado de tentativa, este mismo día 27 de Abril de 2012, se le impuso medida de aseguramiento intramural por lo que fue remitido al penal de la Buga –Valle.

SEGUNDO: El señor **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ**, fue vinculado procesalmente con la presentación de la acusación presentada por la fiscalía Sexta seccional de Buga, en la audiencia de formulación de acusación desarrollada en sede del Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga, con base en el hecho ocurrido el 03 de Enero de 2011, tal y como se desprende del escrito de acusación presentado por la Fiscalía.

TERCERO: Mediante Sentencia No. 022 de 2014 calendada el 26 de Febrero de 2014, y tras permanecer privado injustamente de la libertad en el centro carcelario y penitenciario de Buga, y luego en total incertidumbre esperando la sentencia

absolutoria ejecutoriada, tiempo total de **670 días**, el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Buga, resolvió absolver al señor **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ**, de los cargos formulados por el ente acusador y declarar su inocencia.

Itérese, que a lo largo de los análisis realizados por el Honorable Consejo de Estado, en el Auto proferido el 19 de julio de 2010, con **radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410)**, consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez (E).establece que:

“En los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y la providencia absolutoria queda ejecutoriada. Con fundamento en lo anterior es dable concluir que la caducidad de la acción de reparación directa en los casos en los cuales se invoca la privación injusta de la libertad, se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia en la cual se determina que no existieron fundamentos jurídicos para ordenar la detención.”(Subrayado fuera de texto).

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C del 28 de enero de 2015, con radicación (31145), consejera ponente. Olga Melida Valle De la Hoz (E). Estableció que:

En efecto, es posible que en algunos eventos el demandante obtenga la libertad por una u otra medida jurisdiccional, pero lo cierto es que hasta tanto la decisión que declara la absolución, la preclusión o la cesación del procedimiento, y por ende, la determinación de la privación de la libertad como injusta por la liberación de la responsabilidad, no haya cobrado fuerza ejecutoria, no se tendrá plena certeza sobre la ocurrencia del daño antijurídico y, en consecuencia, no será viable la reclamación indemnizatoria.

CUARTO: En virtud de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ**, le fueron ocasionados daños de carácter moral, material, en vida de relación, así como a su familia, la cual se haya conformada por su cónyuge **GINETH PAOLA RODRIGUEZ PARRA**, su hija **MARIANA MORENO RODRIGUEZ** y su señora madre **MARIA LILIANA MORENO MARTINEZ**.

En relación con los perjuicios morales que aquí se demandan, el distinguido tratadista DR. Juan Carlos Henao nos clarifica:

“En derecho colombiano el juez tiene también la misma preocupación de proteger la dignidad humana. Igual solución que la francesa se observa en el caso del perjuicio moral que se causa a una persona y a su familia que, en momentos de abordar un avión para salir de vacaciones, es detenida erradamente por la policía que creía estar frente a un delincuente, y la trata en consecuencia. En igual sentido se indemnizan los daños morales sufridos por una detención o una acusación injustificadas.”

De igual manera el Tribunal Contencioso Administrativo Del Cauca, se ha manifestado respecto de los daños que sufren las personas que son injustamente privadas de la libertad, Magistrado ponente: NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ :

“El artículo 90 constitucional, establece una cláusula general de responsabilidad del Estado cuando determina que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, de lo cual se desprende que para declarar responsabilidad estatal se requiere la concurrencia de estos dos presupuestos: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) que ese daño antijurídico le sea imputable a la entidad pública, bajo cualquiera de los títulos de atribución de responsabilidad, V. gr. la falla del servicio, el daño especial, el riesgo excepcional, etc.”¹

QUINTO: Para dar cumplimiento a la normatividad vigente en la materia, presentamos solicitud de Audiencia de Conciliación Extraprocesal ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, bajo el radicado N° 52817 del 16 de Febrero de 2016, la Procuraduría respectiva fijó como fecha para la realización de la misma el día 13 de Abril de 2016, valiendo la pena mencionar en la citada diligencia no se llegó a acuerdo alguno entre las partes, tal como se evidencia en el contenido del formato constancias de tramite conciliatorio extrajudicial administrativo del 13 de Abril de 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES

El Régimen Patrimonial del Estado fundado en los artículos 2, 13 y 90 de la Constitución Política de Colombia y materializado en la Reparación Directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, pone en cabeza del Estado el deber de responder patrimonialmente por aquellos daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Es así como, en aquellos eventos en que una persona tenga privación injusta de la libertad, derivado ello de una decisión judicial y posteriormente es colocada en libertad, al presentarse los presupuestos legales que la desvinculan de la investigación penal, ya sea porque el hecho imputado no existió, el sindicado no lo cometió, o no es un hecho punible, probándose además con esa privación de la libertad la existencia de un daño causado generador de perjuicios, aquí se configura el daño antijurídico a reparar por el Estado.

Así las cosas, es claro que la detención injusta de la cual fue objeto el señor **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ**, por el prolongado tiempo de **670 días**, tal como se indicó claramente en la providencia absolutoria, destacando que, el sindicado no incurrió en conducta dolosa alguna y que los hechos investigados no configuraron conducta típica, por ende no le era imputable a mi poderdante ninguna conducta que justificara su detención. Adicionalmente, sus antecedentes como hombre de bien y la cimentada condición de trabajador incansable de ninguna manera permitían pensar a la fiscalía que era necesario asegurar su comparecencia al proceso mediante privación de la libertad, sin lugar a dudas, se trató de una medida excesiva que causó estragos en su vida, tales como la pérdida de su buen nombre, así como el daño significativo que generó en su vida, además de la vida en relación suya y la de toda su familia.

Resulta viable traer a colación que, se vulneraron normas que integran tratados de Derecho Internacional, ratificados por Colombia, dentro de los cuales se reconocen derechos Humanos, los cuales prevalecen en nuestro ordenamiento

¹ Expediente 20050079400

jurídico y son de obligatorio cumplimiento al tenor del artículo 93 de la Constitución Política Colombiana. Esta norma proscribe la detención provisional en las etapas de investigación y su doctrina también considera la obligación de indemnizar por concepto de detención injusta cuando en ella incurren los estados miembros de las organizaciones internacionales que las expiden:

“El comité de Derechos Humanos ha afirmado también que la detención antes de juicio no solo debe ser legal, sino también necesaria y razonable según las circunstancias del caso. El comité ha reconocido que el PIDCP permite a las autoridades mantener de que esta persona comparezca a juicio, pero interpreta de forma muy restringida el requisito de <<necesidad>>. Sostiene que la sospecha de que una persona ha cometido un delito no es suficiente para justificar que permanezca detenida hasta que se realice la investigación y se dicte el acta de acusación formal. El comité ha afirmado, así mismo, que una persona puede permanecer detenida solamente cuando constituya una clara y grave amenaza para la sociedad que no puede ser contenida de ninguna otra forma.”

A su turno el artículo 9 numerales 3 y 5 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, indican, respectivamente: “3. la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá ser subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cual otro momento de las diligencias procesales y en su caso, para la ejecución del fallo.”, “5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.”

En relación al planteamiento en precedencia, resulta tempestivo hacer referencia al SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS creado al interior de la Organización de las Naciones Unidas, que a su vez dio origen al CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE DETENCIÓN O PRISIÓN, adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988, cuyo ámbito de aplicación, es precisamente la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Específicamente el Principio 39, establece: “*Excepto en casos especiales indicados por la Ley, toda persona detenida a causa de una infracción penal tendrá derecho a menos que un juez u otra autoridad decida lo contrario, el interés de la administración de justicia, a la libertad en espera de juicio con sujeción a las condiciones que se impongan conforme a derecho. Esa autoridad mantendrá en examen la necesidad de la detención*”.

Así mismo, el principio 6 de las reglas de Tokio, señala: “*en el procedimiento penal solo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima*”.

Es importante resaltar que el Honorable Consejo de Estado, en diferentes pronunciamientos ha establecido que el Estado responde patrimonialmente en diversos casos, como el presente, de esta manera, **Sentencia del 16 de Julio de 2015, N°: 2075998:**

“Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese

orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado. Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.”

Vale la pena destacar que, la jurisprudencia en cita, resulta de gran relevancia para el presente caso, debido a que como se refleja en el concepto, establece claramente que existe responsabilidad de Estado en los casos que se adecuen a los supuestos legales establecidos, es por ello que mi prohijado cumple con dicho supuesto y a su vez está claro que, no debió y ningún ciudadano deberá soportar la carga de una investigación penal, ya que estamos en un Estado Social de Derecho y las instituciones estatales están plenamente facultadas a nivel de profesionalismo, investigación, entre múltiples factores, para generar esa seguridad jurídica que esta tan importante para que el Derecho Penal como Ultima Ratio deba intervenir.

Como complemento de lo anterior, cabe recordar la **Sentencia Nº 2075752 de 2015**, del Honorable Consejo de Estado, mediante la cual establece que la Fiscalía es responsable de sus falencias que a su vez son generadoras de daños causados a personas inocentes que son privadas de la libertad injustamente, cuyo aparte del texto es del siguiente tenor literal:

“En este concreto caso, tal daño antijurídico le es imputable tanto fáctica como jurídicamente a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto fue la encargada de adelantar la investigación penal y de adoptar, las decisiones que dieron al traste con el derecho a la libertad de la procesada al privarla de la libertad al resolverle la situación jurídica, lo cual en atención a lo dispuesto en el artículo 68 de la ley 270 de 1996, le es atribuible normativamente al ente investigador. Así las cosas, se puede establecer responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad del ciudadano cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria, pese a que, en la detención se haya cumplido las exigencias legales, debido a que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y resulta absolutamente injusto que una persona inocente en un Estado Social de Derecho como el nuestro, sea privada de la libertad, comprometiéndose el ejercicio del derecho fundamental a la libertad.”

La misma Sentencia contempla la indemnización a que tiene derecho la persona afectada, por los daños causados a los familiares cercanos a los sujetos privados de la libertad, de esta manera:

“unificó los criterios de las Subsecciones al concluir que el dolor de los padres, del cónyuge o compañero permanente, y de los hijos del privado de la libertad se equiparan al padecimiento que éste siente por tal situación, motivo por el cual el resarcimiento reconocido en principio debería ser igual o semejante, y a su vez sugirió ciertos parámetros fundamentados en el

tiempo de reclusión, con el fin de establecer de manera objetiva -en la medida de lo posible- un criterio que garantizara los principios de reparación integral, igualdad material y dignidad humana”

En este orden de ideas, debemos establecer que a lo largo de diferentes análisis jurisprudenciales por parte del Honorable consejo de estado, ha establecido con claridad que el termino de caducidad de los procesos de reparación directa y exactamente en los que versa privaciones injustas de la libertad, debe ser tomado desde la ejecutoria de la sentencia de absolución, ya que es allí donde se materializada la ocurrencia de los daños que se plantean, por lo anterior traigo a colación el **Auto proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 19 de julio de 2007, Expediente. 33.918**. “Es posible que en algunos eventos la persona demandante haya obtenido la libertad por una u otra medida jurisdiccional, pero lo cierto es que hasta tanto la decisión que declaró la libertad – y por ende, declaró la ilegalidad de la medida- no haya cobrado fuerza ejecutoria, no se tendrá plena certeza sobre el verdadero acaecimiento del daño y, en consecuencia, no se tendrá certeza acerca de la viabilidad de las pretensiones indemnizatorias”.

La Honorable Corte Constitucional en la Sentencia **T-667 de 2015**, Magistrada Ponente: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, del 26 de Octubre de 2015, establece que:

“En conclusión, en los casos en los que el perjuicio se deriva de la privación injusta de la libertad, por regla general, el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta desde el día siguiente a la ejecutoria de la decisión penal que absolvió al acusado, cesó el procedimiento contra él o declaró la preclusión de la investigación penal, puesto que sólo a partir de ese momento es posible inferir la existencia de un daño antijurídico”.

“En conclusión, en el caso específico de la privación injusta de la libertad, el derecho a reclamar la reparación del daño antijurídico se genera una vez existe certeza sobre la cesación del procedimiento, por absolución o preclusión de la investigación². La anterior certeza se configura cuando la decisión que define sobre el proceso de forma definitiva: sentencia absolutoria o preclusión de la investigación, cobra fuerza ejecutoria (...) “

“En suma, por regla general, el término de caducidad de la acción de reparación directa de dos años se cuenta a partir del día siguiente de la ejecutoria de la decisión que liberó de responsabilidad penal al investigado. Adicionalmente, la caducidad de la acción se interrumpe hasta por un término máximo de tres meses con la presentación de solicitud de la conciliación.”

² Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, 28 de enero de 2015, Rad. 08001-23-31-000-1998-00537-01(31145), CP: Olga Melida Valle de la Hoz, Acápite 2.2.3. “En ese contexto, en los eventos en que el perjuicio se deriva de la privación injusta de la libertad, lo cierto es que el conocimiento del daño se evidencia una vez se tiene la plena certeza acerca de la ilegalidad o la falta de fundamento de la medida restrictiva correspondiente; lo anterior, dado que es a partir del momento en que se califica dicha limitación como injusta o ilegal que la persona detenida tiene pleno conocimiento del daño que se le ha ocasionado y, por consiguiente, puede acudir al aparato jurisdiccional en procura de que dicho detrimento sea resarcido”.

En consecuencia, las pretensiones de la demanda resultan íntegramente viables, como quiera que el señor **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ**, fue privado de su libertad en virtud de una decisión proferida por autoridad competente y **670 días** después puesto en libertad mediante sentencia N° 022 fue absuelto. Con todo el caudal probatorio aportado se demuestra el daño material, moral y a la vida en relación que sufrió mi poderdante y su familia, con ocasión del proceso penal que da origen a la presente demanda.

PERFIL DE LA VÍCTIMA

El señor **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ**, en la sociedad era reconocido como una persona alegre, cariñosa con su familia, trabajador de tiempo completo, responsable con sus obligaciones, buen padre, esposo e hijo, apasionado por la vida, el baile y los paseos.

CALCULO DE LIQUIDACION DE PERJUICIOS

Datos Generales

- Fecha cálculo : Abril 2016
- Fecha de detención carcelaria : 27 de Abril de 2012
- Fecha de sentencia absolutoria : 26 de Febrero de 2014

LUCRO CESANTE

Tiempo a calcular:

Periodo que mi prohijado **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ** estuvo injustamente privado de la libertad, es decir, 670 días

Período lucro cesante consolidado:

Son los meses de la fecha del daño (detención carcelaria) hasta la sentencia absolutoria:

$$\begin{array}{l} 30 \text{ días} \rightarrow 1 \text{ mes} \\ 670 \text{ días} \rightarrow x \text{ meses} \end{array}$$

$$\frac{670 \text{ días} \times 1 \text{ mes}}{30 \text{ días}} = 22,33 \text{ meses} \approx 22 \text{ meses}$$

Por lo tanto el periodo del lucro cesante consolidado es de 22 meses

Productividad víctima:

Total ingreso mensual: \$ 689.455

Se toma el ingreso mínimo de la fecha de la liquidación de los perjuicios, el cual es de \$ 689.455.

Productividad víctima:

Total ingreso mensual:	\$ 689.455
Prestaciones sociales 21.83%	<u>\$ 144.785</u>
TOTAL	\$ 834.240

Ingresos provenientes de su oficio como transportador independiente, certificados por Contador Público. **(Anexo certificación).**

Actualización del ingreso:

$$C \times \frac{\text{Indice final (IPC)}}{\text{Indice inicial (IPC)}} = C \times \frac{\text{IPC Marzo 2016}}{\text{IPC Abril 2012}}$$

$$\rightarrow 834.240 \frac{130,63}{110,92} = 834.240 \times 1,177696 = 982.481$$

LUCRO CESANTE PASADO

$$LCP = C \times \frac{(1+i)^n - 1}{i} \qquad Sn = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$\rightarrow LCP = C \times Sn$$

Sn= Valor actual de lucro cesante mensual
n = Número de meses
i = Interés puro del 6% anual, es decir 0,0048676 nominal
C = Renta actualizada

CALCULO DEL LUCRO CESANTE PASADO

PERJUDICADO	PRODUCTIVIDAD (\$)	MESES (Periodo LCP)	INTERES 6% E.A	FACTOR (Sn)	VALOR LUCRO CESANTE PASADO (Productividad x Sn)
Brayan Steven Moreno Martinez	982.481	22	0,0048676	23,16176	\$ 22.755.989

** Factor (Sn) tomado de Tabla Daño Emergente y Lucro Cesante Pasado, Librería Jurídica Sánchez R. LTDA, Manual de Liquidación en Sentencias Judiciales Administrativo, Civil, Penal y Laboral, Antonio Luis Mendoza Cury, Primera Edición 2012.

PERJUICIOS MORALES

En materia de perjuicios morales, la tendencia actual de las condenas judiciales en casos como el presente, es reconocer sumas altas aunque moderadas, alrededor de 80 salarios mínimos legales mensuales, suma que eventualmente puede ser

mayor, al considerar que el límite para este rubro indicado en el Código Penal llega hasta 1000 salarios mínimos legales mensuales.

Por concepto de daños morales que se refieren a la afectación emocional, pues el señor **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ** se siente afligido, apocado por el tiempo que permaneció injustamente privado de la libertad, además del tiempo que su hija **MARIANA MORENO RODRIGUEZ**, su cónyuge **GINETH PAOLA RODRIGUEZ PARRA** y su madre **MARIA LILIANA MORENO MARTINEZ** no pudieron compartir con él, además del sufrimiento padecido por su madre y esposa quienes siempre han afirmado que el señor **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ** es una persona con buenos valores, sumado al señalamiento de la sociedad como un delincuente por estar sindicado por delitos graves y atroces que él jamás cometió, pero para estos efectos y atendiendo la valoración económica que brinda el Artículo 97 de dicho Estatuto Sustantivo Penal, además con fundamentos en pretéritos, pronunciamientos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

- Para **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ** la suma de \$200.000.000,00.
- Para **MARIANA MORENO RODRIGUEZ** la suma de \$150.000.000,00.
- Para **GINETH PAOLA RODRIGUEZ PARRA** la suma de \$150.000.000,00.
- Para **MARIA LILIANA MORENO MARTINEZ** la suma de \$150.000.000,00.

PERJUICIO DE DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN

Conviene manifestar, que el presente perjuicio se diferencia al del daño moral, dado que el daño a la vida de relación constituye una afectación a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada en mayor o menor grado a causa de una lesión infringida a los bienes de la personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte Sala Civil en su momento denominó "ACTIVIDAD SOCIAL NO PATRIMONIAL".

Es decir, que este perjuicio se puede evidenciar en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también la privación que padece el afectado para desplegar las conductas habituales que marcaban su realidad, debido a la vergüenza que siente por haber estado en la cárcel.

A este respecto se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Penal mediante Sentencia del 25 de Agosto de 2010, radicado 33.833, Magistrado Ponente Yesid Ramírez Bastidas, donde señaló enfáticamente lo siguiente:

"En materia como la que ahora es objeto de decisión, la sala exhorta a los jueces de instancia para que en el objetivo de obtener una autentica reparación integral de perjuicios, mas no un simple remedo de ella, hagan uso con firmeza y sin vacilación de todos los instrumentos legales de que disponen para establecer, cuando así ocurra, la existencia del daño a la vida de relación y su correlativa cuantificación, a efectos de avanzar en la prevalencia del derecho sustancial y la real aplicación del derecho material a favor de quienes acuden ante las autoridades jurisdiccionales después de haber sido lesionados en la forma como en este proceso ha ocurrido".

- Para **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ** la suma de \$100.000.000,00.
- Para **MARIANA MORENO RODRIGUEZ** la suma de \$50.000.000,00.
- Para **GINETH PAOLA RODRIGUEZ PARRA** la suma de \$50.000.000,00.

- Para **MARIA LILIANA MORENO MARTINEZ** la suma de \$50.000.000,00.

PRETENSIONES PECUNIARIAS INDIVIDUALES A INDEMNIZAR

a. Al señor **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ**, con la suma de **TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$322.755.989.00)**, en calidad de víctima y perjudicado por los daños en la Integridad patrimonial, moral y de vida de relación.

1. Daños materiales:	
• Lucro cesante consolidado	\$ 22.755.989.00
TOTAL	\$ 22.755.989.00
2. Daño moral	\$ 200.000.000.00
3. Daño a la vida de relación	\$ 100.000.000.00
VALOR TOTAL A INDEMNIZAR	\$ 322.755.989.00

b. A la menor **MARIANA MORENO RODRIGUEZ**, con la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000.00)**, en calidad de víctima y perjudicada por los daños en la integridad moral y de vida de relación.

1. Daño moral	\$ 150.000.000.00
2. Daño a la vida de relación	\$ 50.000.000.00
VALOR TOTAL A INDEMNIZAR	\$ 200.000.000.00

c. A la señora **GINETH PAOLA RODRIGUEZ PARRA**, con la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000.00)**, en calidad de víctima y perjudicada por los daños en la integridad moral y de vida de relación.

1. Daño moral	\$ 150.000.000.00
2. Daño a la vida de relación	\$ 50.000.000.00
VALOR TOTAL A INDEMNIZAR	\$ 200.000.000.00

d. A la señora **MARIA LILIANA MORENO MARTINEZ**, con la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000.00)**, en calidad de víctima y perjudicada por los daños en la integridad moral y de vida de relación.

3. Daño moral	\$ 150.000.000.00
4. Daño a la vida de relación	\$ 50.000.000.00
VALOR TOTAL A INDEMNIZAR	\$ 200.000.000.00

PRUEBAS

1. Poder legalmente conferidos.

2. Copia registro civil de nacimiento de **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ**
3. Copia registro civil de nacimiento de **MARIANA MORENO RODRIGUEZ**.
4. Copia cedula de ciudadanía **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ**.
5. Copia cedula de ciudadanía de **GINETH PAOLA RODRIGUEZ PARRA**.
6. Copia registro civil de nacimiento de **MARIA LILIANA MORENO MARTINEZ**.
7. Copia constancia juzgado 3 penal circuito de Palmira.
8. Copia escrito de acusación.
9. Copia de acta de audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento de fecha 27 de Abril de 2012.
10. Copia de acta de audiencia de formulación de acusación de fecha 27 de Junio de 2012.
11. Copia de acta de audiencia preparatoria de fecha 19 de Diciembre de 2012.
12. Copia de acta de juicio oral de fecha 27 de Febrero de 2013.
13. Copia acta de audiencia de fecha 15 Noviembre 2013.
14. Copia de acta de juicio oral de fecha 30 de Julio de 2013.
15. Copia de acta de juicio oral de fecha 05 de Septiembre de 2013.
16. Copia sentencia No. 022 de 2104 juez primero penal circuito con funciones de conocimiento.
17. Declaración extrajuicio original de convivencia.
18. Acta Original de Conciliación Extrajudicial ante procuraduría N° 52817 del 13 de Abril de 2016.

TESTIMONIAL

Solicito con mi acostumbrado respeto su señoría se sirva citar a las siguientes personas, para que comparezca ante su despacho para ser práctica esta prueba:

Por parte del señor **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ**:

- Solicito se sirva citar a la señora **ANDREA BAQUERO VELASQUEZ**, identificada con número de cedula de ciudadanía 1130601368, residente en Cali, celular: 3116118097.
- Solicito se sirva citar a la señora **ANGIE CAROLINA PRIETO RINCON**, identificada con numero de cedula de ciudadanía 52354903, residente en Cali, celular 3017098849.

PERICIALES:

- Para la práctica de la presente prueba solicito al señor juez de forma atenta y comedida se sirva oficiar al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE CALI, para que sea designado un perito siquiatria o psicólogo de los profesionales de la referida entidad, para que previos los exámenes pertinentes al señor **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ**, **GINETH PAOLA RODRIGUEZ PARRA**, **MARIA LILIANA MORENO MARTINEZ** y de la menor **MARIANA MORENO**

RODRIGUEZ, identificados como aparece en el capítulo primera de esta demanda, dictaminen sobre los siguientes aspectos:

Existencia, intensidad y duración de conmoción emocional, traumas psíquicos y/o desordenes apológicos sufridos por él, como consecuencia de la detención injusta y arbitraria de que fue víctima **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ**, así como el señalamiento público como delincuente y el deterioro de su entorno social, familiar, comercial y laboral a causa de la sindicación.

Transcendencia, influencia y defecto de tales sindicaciones en su vida personal, social, laboral, cultural, deportiva o recreativa.

La conmoción de que fue víctima el demandante, como consecuencia de la privación injusta de la libertad del señor **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ**, por la interrupción brusca de su interacción consigo mismo, con la familia y la sociedad. La afectación al libre desarrollo de la personalidad y la transcendencia de no haber podido disfrutar situaciones familiares, sociales, académicas, deportivas, culturales, comerciales, democráticas, afectivas, etc., que habría podido vivenciarse por todos los miembros de la familia, sino hubiera mediado la privación injusta de la libertad del padre y la sindicación publica como delincuente o la vinculación injusta al proceso judicial.

PRUEBAS MEDIANTE OFICIO:

Se requiere un cumplimiento de la obligación que tiene toda entidad pública o privada de colaborar con la administración de justicia, teniendo en cuenta que estuvieron privados de la libertad desde el 27 de Abril de marzo de 2012 hasta el 26 de Febrero de 2014, en lo siguiente:

- Que se oficie al INSTITUTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO INPEC-CARCEL DE BUGA , para que mediante escrito establezca de manera detallada cuanto tiempo estuvo el señor **BRAYAN STEVEN MORENO MARTINEZ**, privado de la libertad en dicho establecimiento con prisión intramural y/o prisión domiciliaria.
- Se oficie al CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BUGA, para que expida copia de todos los audios y actas de las audiencias preliminares como las que se llevaron a cabo dentro de juicio oral, respecto al proceso penal bajo el radicado 76-111-6000-165-2011-00096-00, tanto ante el juez de control de garantías como ante el juez de conocimiento.

ESTIMACION DE LA CUANTIA

Bajo la gravedad del juramento estimo la cuantía del presente proceso la cual tomaremos para tal fin la liquidación de los perjuicios ocasionados en la integridad

física y moral solicitados para los demandantes, la suma de **(\$922.755.989,00) NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE.**

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como normas de derecho, las siguientes:

C. N., Arts. 11, 24, 85, 90, 188 y demás concordantes.

C.C. A.- Arts. En sus Arts. 4, 5, y 6. – Artículo 140, Título V C.P.A.C.A Además de las normas concordantes aplicables al caso.

COMPETENCIA

Por el lugar de los hechos y por la cuantía corresponde el presente proceso a su conocimiento en Primera Instancia artículo 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia CPACA y segunda instancia el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo.

PROCEDIMIENTO

El procedimiento es el indicado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Título V (demanda y proceso contencioso administrativo).

LA ACCION

La acción incoada es la de **REPARACION DIRECTA** consagrada en el Art. **140** del C.P.A.C.A

ANEXOS

- Copia de los documentos aludidos como pruebas
- Poder legalmente conferido.
- Copia demanda para archivo
- 3 Copia demanda para traslado
- 1 CD que contiene la demanda

NOTIFICACIONES

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en la Directiva Presidencial 05 de 2012, han dispuesto los siguientes correos electrónicos para efectos de notificaciones judiciales de las entidades convocadas:

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co.

Calle 25N No. 6 A-11 de la ciudad de Cali

RAMA JUDICIAL- ADMINISTRACIÓN JUDICIAL:

dsajbtantifa@cendoj.ramajudicial.gov.co

Carrera 5 No. 12-42 edificio Banco occidente piso 5 de la ciudad de Cali.

LA NACIÓN Carrera 7 no. 75-66 piso 2 y 3 BOGOTÁ D.C

Al suscrito en la carrera 3 No. 12-40 Oficina 1005 edificio centro financiero la ermita de la ciudad de Cali. arce.abogadosconsultores@hotmail.com

Respetuosamente

GABRIEL ALBERTO ARCE SEPULVEDA

C.C. No. 94.538.910 de Cali (Valle)

T.P. 173.906 del C.S.J.